

Víctor PÉREZ-DÍAZ y Juan Carlos RODRÍGUEZ
Alerta y desconfiada. La sociedad española ante la crisis
Madrid, FUNCAS, 2010

Los sucesos que han rodeado la última convocatoria electoral de mayo de 2011 obligan a comentar el trabajo de Víctor Pérez Díaz y Juan Carlos Rodríguez con una nueva perspectiva. Si en los meses posteriores a su publicación (diciembre de 2010) el libro aportaba datos relevantes sobre la percepción que tenían los españoles de la crisis económica y de las políticas a adoptar para hacerle frente, tras los resultados electorales y los acontecimientos políticos que han marcado el proceso nos encontramos ante un trabajo que puede presumir de haber confirmado con creces sus pronósticos (un descalabro del PSOE, una creciente desafección de los ciudadanos respecto a la clase política), brindándonos al mismo tiempo evidencias muy potentes para explicar estos fenómenos y mejorar nuestra comprensión de ellos. Antes de argumentar esta valoración será preciso resumir los elementos clave del libro.

El trabajo de Pérez-Díaz y Rodríguez sitúa a la opinión pública sobre la crisis en el centro del análisis, de forma que, aunque no desdeñan los indicadores macroeconómicos o socioestructurales para caracterizar los "hechos objetivos" de la crisis económica global y las especificidades españolas, la mayoría del material que manejan trata de los "hechos subjetivos" de la crisis (p. 7), es decir, las opiniones y percepciones de la ciudadanía sobre la situación económica, los distintos actores que intervienen en ella y sus posibilidades de acción en el futuro. El argumento

de los autores es que la crisis, siendo resultado del fallo de los mecanismos de regulación del mercado, tiene como consecuencia crucial la generalización de la desconfianza en las élites económicas y políticas que elaboran y hacen acatar dicha regulación, de forma que la crisis del capitalismo pasa a ser una crisis de la democracia. Así, su aportación al conocimiento de la crisis persigue dar cuenta del "sistema de debate, decisión y gestión" (los mecanismos de *gobernanza*, pp. 12 y 22) de la economía abordando las narrativas con las que la ciudadanía se representa la crisis y sus posibles remedios. A partir de la adhesión de la población a dichas narrativas los autores pretenden identificar los "límites cognitivos y morales" (pp. 13-18) que enmarcan la acción colectiva en dicho ámbito, asumiendo que existe una correspondencia entre la predisposición hacia la virtud cívica de la ciudadanía y la de sus élites.

Tras exponer este planteamiento, el libro comienza (Cap. 2) con una breve exposición de los rasgos de la crisis económica en España, poniendo de manifiesto que su intensidad en nuestro país está en relación con la aguda vinculación del modelo de crecimiento económico español a la construcción y las actividades inmobiliarias (p.30). Esta excesiva especialización en las actividades que servían de base a la burbuja financiera hace que las perspectivas de recuperación de la economía española sean bastante pesimistas y apunten

a una lenta y dolorosa reestructuración en busca de una diversificación productiva (lo que los autores denominan el “discurso del cambio de modelo de crecimiento”, pp. 117-119) que permita reducir las altas tasas de desempleo y sus efectos derivados (déficit público, reducción del consumo, etc.). El análisis sobre los efectos de la crisis, aún reconociendo su intensidad y previsible persistencia, permite no obstante relativizar hasta cierto punto su excepcionalidad (las tasas de paro son similares a la crisis de los años 90) y gravedad (salvo para determinados colectivos —inmigrantes varones jóvenes sin cualificación— las redes familiares y las organizaciones asistenciales parecen estar en similares o mejores condiciones que entonces para amortiguar los peores efectos de la crisis).

A partir de este cuadro general, los autores recogen en su análisis los resultados de dos encuestas de 2009 y 2010 (N=807 y 811) en las que se indaga, en primer lugar, sobre la percepción que manejan los españoles acerca de la crisis (Cap. 3). Los ciudadanos entienden que la crisis es más grave de lo que reflejan los medios de comunicación, que la recuperación del empleo tardará (aunque menos de lo que enseña la experiencia de crisis anteriores) y que, como resultado de ella, cerca de la mitad ha visto empeorar la situación financiera de sus hogares. Se trata de un diagnóstico que, además, empeora entre la encuesta de 2009 y la de 2010. La mayoría de los ciudadanos son conscientes del fallo de comunicación del gobierno al negar inicialmente la gravedad de la crisis y tampoco muestran mucha confianza en la información económica que reciben de los medios. Más preocu-

pantes son los datos acerca de su propia capacidad para procesar esa información: cerca de la mitad de los encuestados no sabe a qué datos atender para informarse sobre la crisis y sólo uno de cada diez sabe situar en un horizonte temporal correcto la crisis de colocación de deuda pública que desencadenó el cambio de dirección en la política económica del gobierno (Cap. 4). También es indicativo de este problema las altas tasas de no respuesta que encuentran los autores en algunas preguntas clave.

El retrato que ofrecen los autores de las premisas básicas que asume la población española acerca de la organización de la economía (Cap. 5) apunta a una disyuntiva relevante. Se acepta la economía de mercado y se asume que el reciente crecimiento del bienestar español se debe principalmente a la iniciativa privada (pp. 84-85). Pero al mismo tiempo es mayoritaria la opinión de que el estado debe intervenir en la economía, garantizando un mínimo bienestar a todos los ciudadanos y gestionando, al menos, dos servicios esenciales como la sanidad y la enseñanza universitaria (pp. 88-90). A grandes rasgos, la conclusión de los autores es que la población no cuestiona la economía de mercado, pero sí se cuestiona a sus actores, de forma que el problema de la crisis no es un problema del sistema, sino de su regulación.

Sobre este cuadro general del consenso español en economía, los autores pasan de la visión de conjunto a los detalles de la percepción de la crisis, indagando sobre las responsabilidades que precipitan el acontecimiento y las preferencias respecto a las posibles soluciones o salidas (Cap. 6). Respecto a las responsabilidades en la burbuja inmobiliaria, los autores inclu-

yen en un “todos hemos cometido errores” (p. 102) a ciudadanos, bancos, autoridades monetarias y políticas fiscales. Es discutible hasta qué punto esta jerarquía de culpables, que se establece implícitamente mediante el porcentaje de acuerdo con afirmaciones sobre los errores de previsión de los distintos actores, refleja realmente diferentes grados de culpabilidad. No es lo mismo adquirir una vivienda pensando que su precio no puede bajar que dar muchos créditos imprudentemente, bajar los tipos de interés más allá de lo razonable o subvencionar mediante deducciones fiscales al sector de la construcción.

En este sentido, los autores dejan entrever que los bancos y cajas y las políticas de reestructuración del sector financiero no gozan del aprecio de los españoles. Existe cierta división acerca de la intervención del gobierno en el rescate de las instituciones financieras en apuros, pero hay una amplia mayoría que desconfía de su aportación a la resolución de la crisis y reclama una regulación más estricta. Las políticas de consolidación fiscal reciben mayor atención: partiendo de la idea general de que tres de cada cuatro españoles considera que el gobierno debe atajar el déficit público, un porcentaje similar está en contra de que este ajuste en las cuentas estatales se produzca a través del incremento de los ingresos (es decir, subiendo impuestos). Pero la alternativa de reducir gastos toma al personal del sector público como chivo expiatorio: no se acepta reducir el gasto social ni la, quizás opulenta, inversión en infraestructuras, pero sí reducir el gasto de personal de las distintas administraciones.

Tampoco parece que la reforma del mercado laboral, tal y como finalmente la han acordado patronal, sindicatos y gobierno, sea del agrado de los españoles, nada partidarios de abaratar el despido o desactivar la negociación colectiva y divididos en torno a la reducción de las cuotas empresariales a la seguridad social. Los autores vinculan la inconveniencia de esta postura a una percepción “poco realista” por parte de la población de los problemas e incertidumbres del mercado laboral. Por último, se entiende que a largo plazo la solución de la crisis pasa por el cambio de modelo de crecimiento, un discurso que ha calado muy hondo en una población convencida de que la construcción tiene un peso excesivo en la economía y que sería deseable introducir un mayor componente tecnológico para parecernos a los países más avanzados de Europa. Los modelos de referencia para la población no parecen ser, en cualquier caso, las sociedades liberales anglosajonas que inspiran las actuales reformas, sino Alemania, Francia y Suecia. De forma algo reduccionista, la mejora del nivel educativo aparece como la medida clave para alcanzar el objetivo de la recualificación productiva.

En todas estas posturas, el denominador común estaría en las altas expectativas que los españoles depositan en la acción del gobierno para la salida, a corto o medio plazo, de la crisis. De forma que el sistema de debate en el que se gestan las iniciativas políticas en este ámbito resulta crucial. Más aún cuando, vista la falta de realismo de las preferencias de los españoles en política económica, buena parte de este debate va a consistir en enseñar a los ciudadanos que mucho de lo que piden no es posible,

al menos para la *realidad* que imponen los organismos económicos internacionales. Una labor pedagógica de incierto resultado, dada la falta de credibilidad pública de los distintos actores del sistema de debate (Cap.7): un gobierno improvisador e incapaz, una oposición poco fiable, unos expertos económicos desorientados, unos medios de comunicación poco objetivos, unos grupos de interés (patronal y sindicatos) poco relevantes y unas instituciones europeas amenazantes.

De todos ellos, es particularmente relevante el divorcio entre la ciudadanía y la clase política (Cap. 8). Se trata, sin duda, de una tendencia que las recientes muestras de indignación popular condensadas por el movimiento 15M vienen a confirmar. Aquí los autores replican el esquema que Zingales apunta para el consenso sobre la economía de mercado (se confía en los mercados pero no en las grandes empresas): aunque los ciudadanos tengan una percepción muy negativa de los políticos (ya sean de su partido preferido o del conjunto, los ven como cerrados, incapaces, tergiversadores e irresponsables), apoyan el sistema democrático (votan regularmente y la mayoría renueva su apoyo a los mismos políticos que tan duramente critica, existiendo cierta confianza en que la experiencia de la crisis hará que mejoren sus capacidades). Pero los acontecimientos recientes han sacado al debate público algunos rasgos del sistema político español que, sin lugar a dudas, aconsejan revisar los términos de ese apoyo. No en vano, la parte más activa del movimiento 15M se autodenomina "Democracia Real Ya" y encabeza sus reivindicaciones con importantes modificaciones a los mecanismos de

reclutamiento de las elites políticas, como las listas abiertas, la inhabilitación de los imputados por corrupción o las fórmulas de reparto electoral. Los resultados que presentan Pérez-Díaz y Rodríguez muestran que el movimiento de los indignados, aunque esté siendo articulado organizativamente por personas y colectivos afines a la izquierda radical, recoge pasiones y demandas políticas que contaban con una amplia base social meses antes de su irrupción mediática antes de las elecciones. Quizás estemos ante un movimiento de "excomunistas" y "perroflautas" (por acudir a algunos de los estereotipos que han circulado respecto al 15M), pero no cabe duda de que está dando voz al desencanto de buena parte de los ciudadanos con su clase política que, en una clásica situación de "lobo guardando las ovejas", mira hacia otro lado ante estas reclamaciones.

Los autores aportan aquí la interesante reflexión de que la ciudadanía comparte con sus políticos algunos de sus malos hábitos, al menos en la imagen que tiene de sí misma (Cap. 9): en lo que atañe a la crisis, los españoles no creen que la gente entienda mucho más que el gobierno sobre sus causas; tampoco creen que esté bien informada, que reflexione o escuche opiniones diferentes a las propias. Asimismo, la idea de que los políticos medran por sus méritos dentro de los partidos y no por su capacidad para obtener el bien común se corresponde con una visión de la sociedad en la que el éxito no tiene que ver con el mérito sino con las relaciones, dándose una baja confianza genérica que, en el plano político, se traduce en un voto egoísta que lleva esperar que a la salida de la crisis la sociedad sea menos solidaria. Independen-

dientemente de que se pueda considerar más o menos anacrónico el artificio de equiparar algunos de los indicadores más populares de la literatura sobre valores con “virtudes cívicas” (en particular, la forzada identificación de la justicia con el comportamiento en el trabajo), no se puede dejar de coincidir con los autores en el diagnóstico de que tanto la sociedad española como sus políticos necesitan mayor capacidad de reflexión y diálogo si quieren alcanzar un mínimo denominador común que facilite, en la medida de lo posible, la salida de la actual situación.

Pero en este sentido, el libro tiene, a mi juicio, su mayor defecto en parecer más preocupado por las formas que por el contenido de las soluciones políticas a la crisis. Ya se ha señalado que la confianza en el mercado y su buen juicio lleva a los autores a situar el problema en la regulación y los reguladores, analizando las preferencias de la población en los principales frentes de la política económica (reestructuración financiera, reducción del déficit público, estímulo a la demanda y la inversión, reorientación del modelo productivo). Cabe destacar que las preferencias de los españoles, salvo en la reducción del coste de personal del sector público, se oponen a las recomendaciones (o presiones) de los organismos internacionales y los expertos: no quieren que se rescate a la banca, que se flexibilice el mercado de trabajo ni que se reduzca la inversión estatal en infraestructuras y derechos sociales. Quizás por ello no confían en exceso en la capacidad de los políticos para solventar la crisis, ya sean del gobierno o de la oposición. Y quizás por las mismas razones, más allá la “fe” en las instituciones democráticas y

la “esperanza” (p. 197) en que los políticos se enmienden (Cap.9), vean con creciente recelo la escenificación electoralista de un debate económico en el que ninguna de las alternativas acaba de convencer.

Pero fuera de estas medidas que, viniendo del consenso de los organismos internacionales, se entienden como inevitables, se echan en falta preguntas sobre medidas que, aunque pudieran parecer un disparate para la ortodoxia económica o el oligárquico entorno institucional español, pueden estar más en sintonía con algunos de los sentimientos de la gente. Así, sería deseable conocer en futuros estudios la opinión de los españoles acerca de la entrega de la vivienda para satisfacer hipotecas impagadas, el control de los beneficios de las entidades financieras, la condescendencia del gobierno con las directrices económicas de la UE o el reparto de las cargas fiscales. Por ejemplo, respecto a este último aspecto, la actitud hacia una subida de impuestos puede variar mucho si se plantea en genérico o se especifica mejor (subirlos a las rentas elevadas o a las empresas con beneficios). Por la misma lógica, se echan en falta algunas medidas que, explícita o implícitamente, esgrime la derecha populista, como pudiera ser la expulsión o limitación de los inmigrantes, el recorte de las competencias autonómicas o la reducción de la protección medioambiental. Ciertamente, se trata de medidas que sólo están presentes marginalmente en el sistema español de debate sobre políticas económicas, pero que pueden servir para poner de manifiesto una de sus carencias más importantes: que el consenso en política económica implícito entre los dos

partidos mayoritarios no acaba de ser del agrado de sus potenciales votantes.

También habría que plantear algunas reservas respecto a las conclusiones de los autores. Su preocupación por la capacidad de las elites y la ciudadanía para comprender las causas de la crisis y albergar expectativas razonables sobre su salida viene marcada por un juicio sobre las desventajas culturales y educativas con que la sociedad española afronta esta tarea. Este déficit cultural, discutiblemente argumentado con indicadores de excelencia universitaria por lo que toca a la educación (p. 211), dificultaría a corto plazo que el sistema de debate y decisión genere un adecuado consenso sobre las difíciles y dolorosas medidas que demanda una respuesta “responsable” a la crisis. Asimismo, este déficit es, a largo plazo, el mal que hay que combatir para alcanzar el cambio de modelo productivo que sitúe al país en el lugar del mundo al que aspira. No es este el lugar para juzgar si las expectativas acerca de la incidencia en dicho cambio de una reforma del sistema educativo son o no exageradas. Aunque no se puede dejar de pensar que difícilmente se alcanzará tal objetivo si dicha reforma viene inspirada por las recientes manifestaciones de los autores en un foro empresarial sobre educación sobre la influencia de la genética en el éxito escolar.

Recapitulando, el libro recoge los resultados de una investigación bien planteada, que atiende a indicadores relevantes para el problema que plantea y que, además, tuvo la fortuna de recogerlos en un momento muy oportuno. Ciertamente, bastantes de las preguntas de su cuestionario son habituales en este tipo de estudios y

otras (particularmente las que miden la legitimidad que dan los ciudadanos a los actores económicos) son francamente perfectibles. Pero un buen número de ellas resultan bastante originales y, visto el curso que han tomado posteriormente los acontecimientos, sumamente pertinentes. Me refiero en particular a las preguntas orientadas a recoger cómo evalúan los ciudadanos la competencia económica de sus políticos y empresarios y la suya propia. Resultaría sumamente deseable que este estudio tenga continuidad y que la comunidad sociológica española pueda contar con una serie histórica sobre las opiniones de los españoles en política económica y sus actitudes hacia las elites que las diseñan y ejecutan.

Esto no quiere decir, no obstante, que se esté de acuerdo con la interpretación que hacen los autores de sus resultados ni que se coincida con muchas de las conclusiones que extraen de ellos. Vistos los púlpitos que frecuentan, resulta poco menos que inevitable encontrar asunciones y sesgos ideológicos en algunos párrafos clave que invitan a tomar con ciertas reservas, mayores o menores según la distancia de cada cual respecto a la sociología conservadora española, la contribución del libro al conocimiento sociológico de la coyuntura crucial en que se encuentra el país.

PABLO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
IESA-CSIC
Universidad Pablo de Olavide